



INFORME DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

(A los efectos del artículo 103, apartado 4, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra)

Se ha recibido en esta Intervención Delegada la siguiente propuesta de Resolución de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas:

- Resolución por la que se aprueba el abono a la Fundación Ilundain Haritz- Berri de la cantidad correspondiente a los gastos por enriquecimiento injusto del mes de diciembre de 2020 por la prestación del servicio de reserva y ocupación de 15 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social, por un importe total de 121.369,18 euros, con cargo a la partida 920008 93300 2600 231703 “Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras”, del Presupuesto de gastos de 2021. Expediente contable número 0350000581.

El órgano gestor informa:

- Mediante Resolución 371/2005, de 7 de abril, de la Directora General de Familia, se aprueba el expediente de contratación y se adjudica el concierto para la reserva y ocupación de 20 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social a la Fundación Ilundain-Haritz Berri, de acuerdo con la siguiente distribución:
 - 5 plazas de COA
 - 5 plazas de menores en conflicto social de protección
 - 10 plazas de internamiento para medidas judiciales
- El presente contrato finalizó con fecha 15 de abril de 2015. En este momento, tras varias modificaciones, las plazas a gestionar ascienden a 15 de COA.

- Está previsto que este programa sea asumido por la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales.
- Mientras tanto, se hace necesario mantener el servicio que se presta, en tanto que constituye la ejecución de una obligación legal prevista en las leyes de protección de menores y en consecuencia, está recogida en la cartera de servicios sociales aprobada por el Gobierno de Navarra. La entidad ha prestado el servicio y solicita su abono a través de la presentación de la correspondiente factura que se acompaña del visto bueno de la Sección de Gestión de la Guarda y Ejecución de Medidas Judiciales.

La partida propuesta para los abonos dispone de crédito adecuado y suficiente.

No obstante, habiéndose omitido el expediente de contratación y prescindido de los trámites previstos para él en la Ley Foral de Contratos, incluida la fiscalización previa preceptiva del expediente, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 103, apartados primero, segundo y cuarto, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y se remite al efecto el presente informe al órgano gestor.

Artículo 103. Omisión de fiscalización.

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente el expediente correspondiente hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo.

2. En dichos supuestos será preceptiva la emisión de un informe por quien en el ejercicio de la función interventora tenga conocimiento de dicha omisión. Dicho informe se remitirá al órgano gestor que hubiera iniciado las actuaciones y no tendrá naturaleza de fiscalización.

3. (...)

4. Si la Intervención manifiesta su opinión poniendo de relieve infracciones al ordenamiento jurídico o discrepancias con la actuación de los órganos de gestión, el expediente será trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución. En caso de que la resolución sea favorable, ello no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

Sin otro particular,

LA INTERVENCION DELEGADA EN DERECHOS SOCIALES

INFORME DE ABONO A LA FUNDACIÓN ILUNDAIN HARITZ-BERRI DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESERVA Y OCUPACIÓN DE 15 PLAZAS EN RÉGIMEN DE INTERNADO PARA MENORES EN DIFICULTAD O CONFLICTO

Mediante Resolución 371/2005, de 7 de abril, de la Directora General de Familia, se aprueba el expediente de contratación y se adjudica el concierto para la reserva y ocupación de 20 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social a la Fundación Ilundain Haritz Berri, de acuerdo con la siguiente distribución:

- 5 plazas de COA
- 5 plazas de menores en conflicto social de protección
- 10 plazas de internamiento para medidas judiciales

El presente contrato finalizó con fecha 15 de abril de 2015. En este momento, tras varias modificaciones, las plazas a gestionar ascienden a 15 de COA.

Está previsto que este programa sea asumido por la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales.

Mientras tanto, se hace necesario mantener el servicio que se presta, en tanto que constituye la ejecución de una obligación legal prevista en las leyes de protección de menores y en consecuencia, está recogida en la cartera de servicios sociales aprobada por el Gobierno de Navarra.

La entidad ha prestado el servicio y solicita su abono a través de la presentación de la correspondiente factura que se acompaña del visto bueno de la Sección de Gestión de la Guarda y Ejecución de Medidas Judiciales.

Para el cálculo de la cifra a pagar se tienen en cuenta los siguientes módulos:

	COA
Módulo fijo:	86.459,05
Módulo variable:	9.607,43
Módulo total:	96.066,48
Plazas:	15

CÁLCULO DEL IMPORTE A PAGAR

El nivel de ocupación real del servicio durante el mes de diciembre ha sido el siguiente:

Centro	Nº Plazas	Días ocup./estancias	Módulo año	Coste
COA				
fijo	15	31	86.459,05	109.845,51
variable		432	9.607,43	11.339,92
Coste personal sobreocupación				
TOTAL A PAGAR				121.185,43

Debido a los límites establecidos en la Orden Foral 110/2020, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2020 y la apertura del ejercicio 2021, el pago del mes de noviembre tuvo que realizarse en una fecha en la que las entidades no conocían la totalidad de la ocupación de sus recursos, por lo que fue un pago que tuvo en cuenta la ocupación hasta mediados de mes.

Las posibles diferencias entre la ocupación real del mes completo y la estimada para hacer el pago de noviembre, se han regularizado en la factura del mes de diciembre. En concreto, el coste real del mes de noviembre fue algo superior al pagado, ya que las estancias reales fueron algo superiores. Así, el coste de la regularización de ese mes asciende a 183,75 euros que deben incrementar el coste de la factura del mes de diciembre:

PAGO DICIEMBRE	121.185,43
REGULARIZACIÓN NOVIEMBRE	183,75
COSTE TOTAL DICIEMBRE	121.369,18

PROPUESTA DE PAGO

En consecuencia, desde la Subdirección de Familia y Menores se considera acreditada la necesidad de que se siga prestando el servicio y, por tanto, se propone lo siguiente:

1. Autorizar y disponer el pago a la Fundación Ilundain Haritz Berri, con C.I.F. G-31725484, de la gestión prestada de conformidad durante el mes de diciembre de 2020, que asciende a 121.369,18 euros. Dicho pago se realizará con cargo a la partida 920008 93300 2600 231703 "Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras", del Presupuesto de gastos de 2021, en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, al mantenerse las circunstancias en que se realiza y recibe la prestación.

2. Ordenar el pago de 121.369,18 euros a la cuenta ES25 2100 0565 0602 0000 0133 de la entidad CaixaBank, S.A., con NIF A08663619, en virtud del contrato de cesión de crédito suscrito con la Fundación Ilundain Haritz Berri con fecha 20 de diciembre de 2018, para los pagos derivados de la gestión de este servicio.

Pamplona, 25 de enero de 2021

VºBº La Subdirectora de Familia
Y Menores

Olga Chueca Chueca

La Técnico de Administración Pública
(Rama Económica)

Cristina Intxusta

Conforme la Intervención

INFORME PROPUESTA

Elevo propuesta de Acuerdo de Gobierno de Navarra por el que se resuelven favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

Las disposiciones de gasto y ordenaciones de pagos propuestas tienen su fundamento en las prestaciones de servicios no sustentadas en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución de los contratos en su día suscritos, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, según se justifica en el expediente administrativo.

La situación de las prestaciones a las que se refieren los pagos propuestos son las siguientes:

- **Fundación Ilundain Haritz-Berri**: gestión de 15 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social. Servicios que va a pasar a prestar la “Fundación navarra para la gestión de servicios sociales públicos” creada por Acuerdo de Gobierno de 10 de enero de 2019.

Los siguientes contratos:

- **Asociación Navarra Nuevo Futuro**: servicio de apoyo familiar post-adoptivo y acompañamiento de las familias acogedoras.
- **Asociación Navarra Sin Fronteras**: acogimiento residencial de menores en situación de desprotección y perfil de conflicto social.
- **Fundación Xilema**: Gestión de puntos de encuentro familiar de Pamplona y Tudela.
- **Fundación Xilema**: Gestión de puntos de encuentro familiar de Tafalla y Estella.
- **Mareluur**: Servicio de Orientación Familiar.
- **Pauma**: Programa de intervención familiar

formarán parte de una licitación única que se prevé tramitar a lo largo del primer semestre de 2021, por lotes, que englobará también el resto de contratos actualmente en vigor del ámbito del sistema de protección de menores y que pretende dar respuesta a la necesaria reordena-

ción de los recursos de este ámbito y a la asunción del nuevo convenio colectivo de intervención social que se está negociando en la actualidad.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia de los servicios su prestación por parte de las empresas que han venido gestionándolos se considera imprescindible mientras dura el trámite descrito de licitación y adjudicación de los mismos a otras entidades, aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

En vista de que nos encontramos ante unas prestaciones ya debidamente ejecutadas pero sin el adecuado soporte contractual es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual, no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (*lucrum emergens*) o por una no disminución del patrimonio (*damnum cessans*).

- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir *damnum emergens* (daño positivo) y *lucrum cessans* (*lucro frustrado*), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.

- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.

- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido las propuestas de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención

Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación de los servicios tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar los servicios prestados, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar los enriquecimientos injustos, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe unos servicios a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, se propone al Gobierno de Navarra, que resuelva favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, por un importe total de 412.330,33 euros, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

LA DIRECTORA-GERENTE DE LA AGENCIA NAVARRA PARA
LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Inés Francés Román

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

"ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 10 de febrero de 2021, por el que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y a instancia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, se resuelven favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del procedimiento para su abono.

La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas propone aprobar la autorización y disposición del gasto de las facturas relacionadas en el anexo, a los efectos de proceder a su abono.

Las disposiciones de gasto y ordenaciones de pagos propuestas tienen su fundamento en las prestaciones de servicios no sustentadas en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución de los contratos en su día suscritos, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, según se justifica en el expediente administrativo.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia de los servicios, su prestación se considera imprescindible por lo que las empresas han venido prestándolos aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

En vista de que nos encontramos ante unas prestaciones ya debidamente ejecutadas pero sin el adecuado soporte contractual, es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por una no disminución del patrimonio (damnum cessans).

- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir damnus emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.

- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.

- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido las propuestas de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación de los servicios tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar los servicios prestados, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar los enriquecimientos injustos, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe unos servicios a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales,

ACUERDA

1.º Resolver favorablemente, a instancia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, por importe de 412.330,33 euros, conforme a la

doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto, y ordenar la continuación del procedimiento para su abono.

2.º Trasladar este acuerdo a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a las Secciones de Familias, de Valoración de las Situaciones de Desprotección y de Gestión de Guarda y Ejecución de Medidas Judiciales de la Agencia, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a la Sección de Concertación, al Interventor Delegado y al Centro contable en el citado Departamento."

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos. Pamplona, 10 de febrero de 2021.-LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y ACCIÓN NORMATIVA, María Belén López Carballo.

ANEXO

Contrato	Entidad a abonar	CIF	Concepto	Abono	Expediente
Servicio de apoyo familiar post-adoptivo y acompañamiento de las familias acogedoras	Asociación Navarra Nuevo Futuro	G31058274	Pago diciembre	11.865,61	350000576
15 plazas menores dificultad o conflicto social	Fundación Ilundain Haritz-Berri	G31725484	Pago diciembre	121.369,18	350000581
Puntos de encuentro familiar de Tafalla y Estella	Fundación Xilema	G71068647	Pago diciembre	5.253,44	350000580
Puntos de encuentro familiar de Pamplona y Tudela	Fundación Xilema	G71068647	Pago diciembre	33.716,89	350000579
Servicio de orientación familiar	Mareluur	J71319636	Pago diciembre	21.525,33	350000575
40 plazas de acogimiento residencial de menores en situación de desprotección y perfil de conflicto social	Asociación Navarra Sin Fronteras	G31097058	Pago diciembre	162.048,12	350000578
Programa de intervención familiar	Pauma, S.L.	B31157514	Pago diciembre	56.551,76	350000577
				412.330,33	

La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, ha dictado la siguiente:

“RESOLUCION 1273/2021, de 12 de febrero, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por la que se aprueba el abono a la Fundación Ilundain Haritz- Berri de la cantidad correspondiente a los gastos por enriquecimiento injusto del mes de diciembre de 2020 por la prestación del servicio de reserva y ocupación de 15 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social.

Por Resolución 371/2005, de 7 de abril, de la Directora General de Familia, se adjudica el concierto para la gestión de menores en dificultad social a la Fundación Haritz – Berri, del 7 de abril al 31 de diciembre de 2005. Dicho contrato ha finalizado con fecha 14 de abril de 2015, no obstante el servicio se sigue prestando actualmente por razones de interés público.

Visto el informe de la Sección de Concertación para la Dependencia con el visto bueno de la Subdirección de Familia y Menores, referente al abono a la Fundación Ilundain Haritz- Berri de la cantidad correspondiente a los gastos por enriquecimiento injusto del mes de diciembre de 2020 por la prestación del servicio de reserva y ocupación de 15 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social.

Por acuerdo de 10 de febrero de 2021 del Gobierno de Navarra se resuelven favorablemente determinados expedientes de abono conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto, entre los que se encuentra éste, por lo que procede el abono de la cuantía propuesta.

En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el Decreto Foral 301/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas;

RESUELVO:

1º Autorizar y disponer el pago de 121.369,18 euros en concepto de los gastos por enriquecimiento injusto del mes de diciembre de 2020 a favor de la Fundación Ilundain Haritz Berri, con C.I.F. G-31725484, por la reserva y ocupación de 15 plazas en régimen de internado para menores en dificultad o conflicto social, con cargo a la partida 920008 93300 2600

231703 “Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras”, del Presupuesto de gastos de 2021.

2º Ordenar el pago de 121.369,18 euros a la cuenta ES25 2100 0565 0602 0000 0133 de la entidad CaixaBank, S.A., con NIF A08663619, en virtud del contrato de cesión de crédito suscrito con la Fundación Ilundain Haritz Berri con fecha 20 de diciembre de 2018, para los pagos derivados de la gestión de este servicio.

3º. Notificar esta Resolución a la Fundación Ilundain Haritz Berri, a los efectos oportunos, haciendo constar que no agota la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

4º.- Trasladar esta Resolución a la Subdirección de Familia y Menores, a la Sección de Gestión de la Guarda y Ejecución de Medidas Judiciales, a la Sección de Concertación para la Dependencia y al Centro Contable de la Sección de Gestión Económica y Presupuestaria de la Secretaría General Técnica, a los efectos oportunos.

Pamplona, a doce de febrero de dos mil veintiuna. La Directora Gerente De La Agencia Navarra De- Autonomía Y Desarrollo De Las Personas. Inés Francés Román.”.

Lo que notifico a Vd., para su conocimiento a los efectos oportunos.

Pamplona, a quince de febrero de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

Ignacio Iriarte Aristu